## Del Post Pinochetismo a la Sociedad Democrática

## Manuel Antonio Carretón

"Del post pinochetismo a la sociedad democrática", es el último libro de Manuel Antonio Garretón, nominado Premio Nacional de Ciencias Sociales 2007. Su tesis central es que si bien Chile ha vivido un profundo proceso de democratización política, crecimiento económico y modernización cultural a partir de 1990, aún permanece entrampado en la herencia institucional de la dictadura militar. "Se trata -afirma provocadoramente Garretón- de una sociedad postpinochetista y no de una sociedad plenamente democrática, desarrollada ni moderna".

Más que retomar la vieja discusión sobre si la transición terminó o vivimos indefinidamente en ella -que el propio autor se ocupa de zanjar de manera rotunda, poniendo su cierre el 11 de marzo de 1990 cuando se instala el primer parlamento y Patricio Aylwin asume como el primer Presidente elegido democráticamente luego del golpe militar-, Garretón se plantea dos acuciantes e inquietantes interrogantes ¿era posible otra forma de terminar con la dictadura? ( o más bien ¿eran posibles otros términos y condiciones para que los militares entregaron el poder a la civilidad luego de haber sido derrotados en el plebiscito de 1988?). La segunda interrogante es aún más interpeladora y apunta no sólo a quienes han conducido los sucesivos gobiernos concertacionistas, sino al conjunto de la clase política, incluyendo partidos y parlamento. La pregunta es ¿por qué no se ha completado la transición con la reforma política y con otros cambios en la sociedad para llegar a la plena democracia y lo que él define como la sociedad del Bicentenario? Ese es un tema crucial, que de una u otra forma ha cruzado el debate político de los últimos años, enfrentando a los llamados sectores autocomplacientes con los motejados autoflagelantes. Unos culpan a la derecha y los poderes fácticos. Otros a los neoliberales y los propios gobiernos de la Concertación. A los partidos. En suma, a la calidad de la política, que es de lo que verdaderamente trata este libro. Con la autorización de su autor, hemos tomado un extracto de su libro, publicado en la revista argentina "Umbrales" del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) para su publicación en nuestra revista.

Es sabido que a diferencia de otras situaciones post dictatoriales, en Chile todos los gobiernos han estado en manos de una coalición de partidos de centroizquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por el Partido Democratacristiano (PDC), principalmente, el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), en el centro, el Partido por la Democracia (PPD) de

orientación progresista y el Partido Socialista (PS) más clásicamente de izquierda. Los dos primeros presidentes fueron democratacristianos (Patricio Aylwin, 1990-1994 y Eduardo Frei, 1994-

2000) y los dos siguientes, un PPD, Ricardo Lagos (2000-2006) y una socialista, Michelle Bachelet (2006-2010). Esta coalición ha sido extremadamente exitosa, en primer lugar electoralmente,

ganando todas las elecciones parlamentarias, municipales presidenciales (con la excepción de la primera vuelta presidencial de 2005, en la que la candidata Bachelet obtuvo menos votación que la suma de los dos candidatos de la derecha, aunque este resultado se revirtió en la segunda vuelta). En segundo lugar, en la

administración del gobierno, tanto en lo que se refiere a indicadores de crecimiento y desarrollo económico, como los de tipo social -con una tendencia sostenida a la superación de la pobreza-, los de

infraestructura, modernización e integración mundial (pese a una debilidad en la dimensión latinoamericana, que recién intenta corregirse). Quizás además de la oposición de derecha, sea este mismo éxito el que limitó a la coalición en su capacidad transformadora para evitar riesgos electorales, lo que puede explicar en parte por qué no se resolvieron, o sólo se resolvieron parcial y tardíamente, problemas tan fundamentales como la vigencia de una institucionalidad no democrática, expresada básicamente en la Constitución de 1980 y su normativa derivada, el predominio de los

poderes fácticos, la ausencia de canales de participación ciudadana y, sobre todo, las desigualdades socio-económicas.

Pese a la existencia episódica de conflictos internos, que a veces han podido llegar a situaciones relativamente críticas y a que se han acentuado en el gobierno de Bachelet, lo que llama la atención de cualquier analista político es la estabilidad de la coalición y su unidad de diecisiete años. Lo cierto es que cuando tal unidad se ha visto resquebrajada, ello se ha debido principalmente a la discusión de los cupos electorales, en el marco del perverso sistema binominal, los nombramientos en el Ejecutivo y las cuotas ministeriales y de otros cargos, así como el deslindamiento de responsabilidades, errores o denuncias respecto de alguna política pública como, por ejemplo, la crisis producida por el proyecto Transantiago, que buscaba resolver el problema del transporte público en la capital.

Hacia finales del 2006 se produce un conflicto importante en el PPD y en el 2007 otro en la DC, ligados, al menos en el discurso, tanto a los hechos de corrupción en algunas reparticiones públicas, como a las políticas de transporte mencionadas, que marcan un nuevo tipo de problema en la coalición. El primero significó el abandono del partido de un senador y un ex presidente del partido, acompañados de un número pequeño de militantes, pero con un enorme impacto mediático, promovido por la prensa de oposición que veía aquí la oportunidad de división de la Concertación. Este grupo intenta crear un nuevo referente político, fuera de la Concertación, pero su futuro es muy precario. El segundo consistió en la



votación en contra de un importante proyecto del Ejecutivo por parte de un senador ex presidente de la DC, líder de una fracción de ese partido. La importancia de ambos conflictos, que van acompañados, además, de recriminaciones entre los diversos componente de la coalición, es que, por primera vez la Concertación aparece no contando con el apoyo irrestricto de sus parlamentarios en las votaciones, lo que obligaría a negociar proyectos fundamentales de transformación económico-social, como el de previsión social o el de educación, con la derecha, cediendo aspectos centrales del cambio del patrón neo-liberal heredado y, por otro lado, aparecen señales de división que apuntan, por parte de algunos sectores, a su quiebre, alentados en esto por la derecha opositora.

Es a partir de esta situación que se habla del agotamiento del proyecto de la Concertación, de la necesidad de su refundación y que se tiende a predecir la probabilidad de que no habrá un nuevo gobierno en el 2009, ya sea porque no sobrevivirá para poder enfrentar unificada el proceso electoral, ya sea porque será derrotada en estas elecciones. El test más cercano para confirmar estas hipótesis serían las elecciones municipales del 2008. A nuestro juicio, más que estas confrontaciones y conflictos -marcadas muchas veces por intereses, estrategias y protagonismos personales y grupales que tiende a desbordar a cada partido y que por lo tanto, no pueden verse como conflictos o divisiones interpartidarias-, lo que realmente está en juego para el futuro de la Concertación son dos cuestiones.

La primera es el problema de fondo y tiene

que ver con la capacidad que tenga la coalición de pasar desde la época post pinochetista a la época democrática o, si se quiere, a la época del Bicentenario. Ya veremos qué significa esto. Por el momento digamos que desde el punto de la Concertación la cuestión básica es la de su proyecto. La democratización y transformación del país para lo cual nació la Concertación, si bien ha avanzado notablemente, están lejos de haberse completado. En parte, porque en una medida importante se está preso de la institucionalidad heredada de la dictadura, lo que

impide -y esa es la otra parte-, la superación de la herencia del modelo socio-económico que ha sido corregido, pero no reemplazado por uno de corte definitivamente socialdemócrata. Es cierto que han surgido voces desde la Concertación, y muy recientemente ha circulado un documento de un senador planteando ideas al respecto, que apuntan a ello, pero son normalmente dejadas en el olvido para evitar enfrentar lo que realmente hace falta, cual es un debate sobre el proyecto concertacionista. Si se consideran las declaraciones de la Presidenta Bachelet en el sentido de crear un Estado de protección como el horizonte o proyecto histórico actual de la Concertación, el gran problema es que, por un lado, ello no puede hacerse con la actual institucionalidad orgánica y normativa del Estado, y por otro, tampoco puede hacerse manteniendo la contradicción entre modelo socialdemócrata y conducción económica liberal. Se puede administrar un Estado de protección o bienestar con esa política económica, pero no se le puede crear. La prueba flagrante de ello es la persistencia de las desigualdades, pese a los avances en el crecimiento y en la modernización. Para algunos sectores juveniles y sociales -e incluso figuras importantes de la Concertación-, se hace necesaria una nueva alianza política que reconstituya la izquierda clásica. Ello estaría expresado en la búsqueda no sólo de incorporar a los componentes típicos como el Partido Comunista hoy día, a diferencia de la primera década de la democracia, interesado principalmente en su incorporación al parlamento, del que está excluido debido al sistema electoral binominal, sino también a vastos sectores que permanecen al margen de la política oficial.

Si bien esta opción debe ser objeto de debate hacia el futuro, no parece que una alternativa a la Concertación pueda hoy tener algún éxito en la medida en que, insistimos, es vista como una coalición exitosa en la que cada uno de sus componentes juega aun un papel fundamental e insustituible.

Pero no puede negarse que el problema de fondo al que hemos apuntado está atravesado, y en la medida que se trata de períodos de cuatro años lo está permanentemente, por la cuestión de liderazgo de la Concertación y de la sucesión presidencial. Además, los problemas encontrados por el actual gobierno han acelerado esta discusión. Los datos duros al respecto son que hay un equilibrio de fuerzas entre la DC y el bloque PS-PPD -que lo rompe a favor de este último el PRSD-y que hasta ahora ha habido dos presidentes DC seguidos y dos Presidentes del bloque PS-PPD seguidos y que en la próxima elección se rompería ese equilibrio.

Sin duda que el candidato con la mayor opción, según todas las encuestas, es el ex Presidente Ricardo Lagos, del eje PS-PPD, pero a la DC un tercer Presidente de este bloque le crea enormes problemas internos y entonces hay quienes postulan que en primera vuelta se lleven dos candidatos, lo que es probable, pero que obviamente cambia el carácter de la coalición -y sus consecuencias no han ido aún evaluadas-. No parece, pese a las renuencias para ello, que esto se pueda resolver sin un acuerdo de más de un período y con un principio pactado de la alternancia y un mecanismo que permita la presentación en primarias abiertas de más de un candidato por partido.

## La oposición de derecha y sus debilidades democráticas

Nos hemos referido varias veces a la oposición de derecha, conformada por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), que funcionan como una coalición opositora al gobierno denominada Alianza por Chile. Recordemos que el núcleo fundante de esta derecha, distinta de la que predominó en el siglo XX hasta los '60, es el pinochetismo, es decir, se trata de un sector

político que nace como heredero de lo que se considera el proyecto u obra del régimen militar. En términos estrictos, sus conceptos, principios y mecanismos de constitución y funcionamiento no son los de la democracia, aunque hayan tenido que adaptarse a estas reglas del juego.

El componente básico de su identidad es la defensa de la institucionalidad, constitucional, económico-social y en todos los planos, generada por la dictadura militar y asegurada por los enclaves institucionales presentes en la Constitución y en la normativa complementaria. En la medida en que algunos de estos enclaves han desaparecido o se han atenuado debido a las reformas constitucionales bastante tardías y parciales, durante el gobierno de



Lagos, la derecha se refugia en la manutención del sistema electoral binominal que exige quórum muy altos para ser cambiado y que asegura una representación que bloquea cualquier cambio sustantivo del modelo socioeconómico.

Lo dicho puede hacerse extensivo a toda la derecha, pero es especialmente aplicable al sector hegemónico de ella, constituido por la UDI. Lo cierto es que desde Renovación Nacional, de origen sociopolítico distinto, no ha podido surgir un liderazgo hegemónico que cambie el carácter autoritario de la derecha.

Las disputas en la Alianza siempre terminan resolviéndose a favor de la UDI y a través del endurecimiento de la oposición a los gobiernos de la Concertación, que es donde encuentran su mayor punto de unidad, lo que enfatiza

una dimensión básicamente atávica y obstructiva.

Sin embargo, el triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales del candidato de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, que incluso votó por el NO en el plebiscito de 1988, por sobre el candidato de la UDI Joaquín Lavín, y que lo perfila como el postulante con mayores posibilidades dentro de la Alianza para las elecciones del 2009 y la muerte de Pinochet, en el 2006, abren más espacios para la refundación de una derecha con carácter democrático.

Ello tiene dos límites. Por un lado la riqueza y actividad empresarial y comunicacional, algo así como el modelo Berlusconi, del líder presidenciable de Renovación

Nacional y el carácter de su nueva directiva, si bien se ubica en un eje crítico y alejado de la dictadura o más proclive a la democracia, le acercan demasiado a la imagen de una derecha de los ricos y plutocrática. En un país sicológicamente más de centro-izquierda y democrático.

Por otro lado, mientras el núcleo dirigente de la UDI sea el mismo que respaldó a la dictadura y las violaciones de derechos humanos de que ella es culpable, es decir, mientras su elite dirigente no haga el mea culpa que sí hicieron los militares, la derecha seguirá siendo vista como la heredera de la dictadura y no como una alternativa de futuro, lo que significa la reproducción de la situación del plebiscito de 1988 que favorece ampliamente a la Concertación.

## La política en la era post pinochetista

Y con esto, volvemos a la cuestión central que hemos mencionado y que caracteriza a la política chilena en los últimos 17 años. De lo que se trata -y algunos de nosotros lo hemos venido diciendo desde hace más de una década y lo hemos reiterado recientemente-, es que -caso único en la América Latina post dictatorial- el conjunto de la institucionalidad heredada de la dictadura impide una verdadera democracia, un Estado dirigente y gobiernos que puedan cumplir con los programas para los que fueron elegidos porque carecen de los recursos materiales y políticos, debido a los enclaves autoritarios o a los poderes de veto de las minorías.